

# Bush y la "Iniciativa Andina Antidrogas"

El presidente George W. Bush anunció en abril un nuevo e importante programa para los Andes. Aunque el nombre "Iniciativa Andina Antidrogas" supone una ampliación del punto de mira, el paquete de 731 millones de dólares es, en buena parte, una expansión de la política desarrollada bajo el gobierno de Clinton, conocida como «Apoyo de los Estados Unidos al Plan Colombia». El nuevo énfasis retórico sobre la región andina en su totalidad es, de alguna manera, un regreso al enfoque del primer presidente George Bush, quien lanzó la primera «Iniciativa Andina» en 1989. Esa iniciativa se construyó también sobre la base de armar y entrenar a las fuerzas militares y policiales de los Andes para combatir las drogas. Lo único que obtuvo dicha estrategia fue desplazar los cultivos de coca a nuevas áreas de la región, entre las cuales está Colombia. Los informes que delataban el fracaso de esa primera iniciativa, además de la creciente preocupación por la naturaleza abusiva y corrupta de nuestros aliados en la guerra a las drogas, influyeron para que el Congreso estadounidense declinara notoriamente su interés en proveer fondos para tal fin. Los niveles de financiación permanecieron relativamente bajos hasta el segundo período del gobierno de Clinton, cuando los funcionarios comenzaron a ponerle atención, y luego recursos, a la crisis en Colombia.

## Plan Colombia

El paquete de «emergencia» del presidente Clinton ("Apoyo Estadounidense al Plan Colombia") totalizó 1.300 millones de dólares para el 2000 y 2001, enfocándose en la estrategia llamada «Ofensiva del Sur de Colombia». Mientras que el Plan Colombia original del presidente Pastrana, en 1998, era una estrategia de cuatro aristas; apoyo a los esfuerzos de paz, desarrollo, reforma política y seguridad ciudadana, la ayuda estadounidense con ese fin fue desviada considerablemente hacia las operaciones antinarcoáticas. El paquete antinarcoático aprobado en el verano del 2000 hizo de Colombia el tercer mayor receptor de ayuda estadounidense destinada a seguridad en el mundo. Con esta ayuda se está equipando y entrenando a tres batallones del ejército colombiano en el sur de Colombia para proveer apoyo de tierra para las campañas de fumigación aérea con herbicidas.

## La financiación del Plan

Colombia incluyó también 458,7 millones de dólares (35% del total) para los países vecinos, incluyendo la construcción de bases militares estadounidenses en Ecuador y el Caribe.

Los contratistas estadounidenses junto con los dos batallones existentes del ejército colombiano comenzaron operaciones en diciembre de 2000. Según funcionarios estadounidenses, en los primeros cuatro meses se fumigaron más de 30 mil hectáreas de coca en el departamento sureño del Putumayo con una mezcla de Glifosato y otros químicos desconocidos.

Los batallones del ejército han proporcionado el apoyo de tierra a los aviones fumigadores, ello a pesar de que los ataques han sido sólo esporádicos, en parte debido a que, seis meses antes que comenzaran las campañas de fumigación en el Putumayo, la zona había sido tomada por los

grupos paramilitares de derecha relacionados con el ejército colombiano.

## Diversidad de críticas

Los programas de fumigación han generado una gran controversia. Los gobernadores de los seis departamentos más afectados por las fumigaciones han hecho campaña en contra de éstas. El Defensor nacional de los derechos humanos en Colombia, ha pedido un alto a las fumigaciones, tildándolas de «indiscriminadas» en un informe que documenta la destrucción de cultivos legales de pancocker, la fumigación de reservas indígenas, de proyectos de desarrollo alternativo, así como las tierras de campesinos que se han acogido a los programas de erradicación manual. Aunque no se han completado estudios independientes que evalúen las repercusiones de las fumigaciones a largo plazo, la prensa ha realizado una amplia cobertura de las quejas presentadas por motivos de salud y de daños medioambientales causados por las fumigaciones de herbicidas. Los medioambientalistas señalan que estas Operaciones, que cuentan con el apoyo de los EE.UU., violan las recomendaciones de la EPA (Agencia Estadounidense de Protección del Medioambiente) y de Monsanto (productor del Glifosato) para el buen uso de este químico.

La política está siendo criticada también desde otros frentes. Algunos de los más furibundos partidarios el año pasado del Plan Colombia en el Congreso estadounidense, como los representantes Ben Gilman (Republicano, Nueva York) y John Mica (Republicano, La Florida), proponen ahora que el apoyo dado al ejército colombiano que perciben como ineficaz y corrupto se traslade a la policía. Incluso quienes apoyaron en el Congreso la estrategia estadounidense, han criticado después el acento excesivo puesto en lo militar, señalando que el paquete fue vendido como una estrategia

balanceada. Estos congresistas están ahora presionando un incremento en la ayuda económica y social, manteniendo el aspecto militar. Hasta ahora, las operaciones militares han tenido claramente prioridad en Colombia. A seis meses de haber comenzado las fumigaciones, casi ninguna de las ayudas destinadas a desarrollo alternativo, derechos humanos o reforma judicial, ha sido entregada.

Las organizaciones de derechos humanos, religiosas, de desarrollo y de refugiados han denunciado las repercusiones negativas de la política estadounidense, desarrollando un extenso trabajo público de educación y de incidencia sobre el tema. Incluso en círculos del Departamento de Defensa, que encabezan los esfuerzos para ampliar las relaciones estadounidenses con el ejército colombiano, hay gran inquietud ante la posibilidad de verse arrastrados en un conflicto complejo, que no se presta a una solución militar, que no tiene claros sus objetivos, y que no cuenta con un «plan de salida».

Los gobiernos europeos que no ofrecieron una contribución al Plan Colombia equiparable con la estadounidense, tal como se esperaba se han mostrado fuertemente críticos ante la estrategia estadounidense. El primero de febrero, el Parlamento europeo aprobó la resolución 4741 que apoya el proceso de paz en Colombia, anotando que un «incremento de lo militar en la lucha contra las drogas conlleva el riesgo de desatar una escalada del conflicto en la región, y que las soluciones militares no conducen a una paz duradera». La resolución pide a la Unión Europea «seguir su propia estrategia no militar, combinando neutralidad, transparencia, participación de la sociedad civil y responsabilidades de las partes involucradas en las negociaciones».

Los esfuerzos del ejército y la policía en Colombia para combatir la insurgencia y erradicar los cultivos de coca en el marco de la «Ofensiva del Sur»

tienen profundas implicaciones regionales: han aumentado las tensiones entre los gobiernos andinos así como la violencia política en la región; decenas de miles de personas han sido desplazadas, y la producción de cultivos ilícitos se ha dispersado hacia otras partes de Colombia, y hacia los países vecinos, Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá. Estos países, por su parte, han movilizado tropas y helicópteros hacia las fronteras, y han pedido la ayuda de Washington para afrontar los efectos del desbordamiento del conflicto.

#### La Respuesta de Bush

Frente a tales críticas, el presidente Bush, en vez de hacer una reevaluación de las políticas heredadas, propone la expansión de la estrategia de apoyo a la policía y a las fuerzas de seguridad en la guerra a las drogas en toda la región andina. Su propuesta, que debe ser canalizada a cuenta de la dependencia internacional para narcóticos del Departamento de Estado (INL, en inglés), dedica la mayoría de los recursos (55%) a Colombia, pero incrementa la cantidad destinada a los vecinos de Colombia. Para el año fiscal 2002, se ha planeado entregar a Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá un total de 136,5 millones de dólares en ayuda militar y policial, solamente en lo que respecta al INL. Habrá aportes adicionales provenientes del Departamento de Defensa y de otras agencias que todavía no han hecho pública la solicitud detallada de los fondos.

A nivel de principios y de la pura retórica, la política estadounidense hacia los Andes ofrece apoyo público a los líderes de la región elegidos democráticamente para que hagan frente a las dificultades del desarrollo y a la protección de los derechos humanos. Pero, a nivel práctico y de recursos, la política y sus consecuencias son muy diferentes. En vez de diri-

girse al meollo de la crisis de la región andina en su complejidad, los Estados Unidos se quedan básicamente en su interés de alcanzar los objetivos antinarcóticos, en buena parte a través del ofrecimiento de entrenamiento, equipos y apoyo de inteligencia a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de los países de la región.

Según muchos analistas, esta política amenaza con: 1) suscitar, en lugar de reducir, tensiones entre las naciones andinas; 2) incrementar la tensión social entre los diversos países; 3) incrementar el poder y las prerrogativas de fuerzas abusivas de seguridad y de inteligencia; 4) exponer a estas fuerzas a nuevas posibilidades de corrupción al desplegárselas más directamente en la guerra a las drogas; y 5) dirigir a los EE.UU. hacia un mayor compromiso con la guerra a las drogas en los Andes, sin ninguna estrategia clara de escape y pocos precedentes históricos que sugieran perspectivas de éxito.

El presidente Pastrana ha presionado la aprobación de la Iniciativa Comercial de los Andes, siendo ésta su solicitud más urgente de los Estados Unidos para el año que le queda en la presidencia. En una tentativa de suavizar las repercusiones de las operaciones antinarcóticos, la nueva solicitud de presupuesto del presidente Bush para su iniciativa regional andina contiene algunos programas sociales y económicos. Sin embargo, el campo de la política estadounidense hacia la crisis andina en general, se reduce esencialmente al hecho de que los Estados Unidos van a ofrecer apoyo a los programas antinarcóticos militarizados de Panamá a Brasil, con el fin de contener los efectos colaterales de los programas antinarcóticos militarizados de los Estados Unidos en Colombia.

---

#### WINIFRED TATE

ANTROPOLOGA NORTEAMERICANA, MIEMBRO DE WOLA ONG.